



EEconomista

Transición en el tablero geopolítico

Von der Leyen impulsa un tope temporal para los beneficios de las energéticas

La propuesta ha recibido ya el apoyo de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria

La UE apoyará más redes, una reforma de los peajes y un impulso a los contratos bilaterales

Rubén Esteller MADRID.

La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para afrontar el impacto económico de la crisis de Irán. El plan que ha trazado la presidenta Ursula von der Leyen se centrará en cuatro pilares: el coste de la electricidad, los cargos de las redes, los impuestos y tasas y el coste de las emisiones de CO2.

En el planteamiento inicial de la Comisión a los estados se abre la puerta a que los países sigan utilizando mecanismos de emergencia como topar el precio de la generación con gas y redistribuir los llamados beneficios inframarginales, como ya ocurrió durante la crisis energética de 2022. Eso sí, advierte de que estas medidas deberán analizarse caso por caso y diseñarse de forma que no distorsionen el mercado interior, no desincentiven la inversión en energías limpias y no disparen la demanda de gas.

Esta medida, analizada posteriormente en la última reunión del Ecofin, ha recibido ya el apoyo de países como Alemania, Italia, España, Portugal y Austria, que mediante una carta de sus ministros de Economía han mostrado su apoyo a este planteamiento que ya fue utilizado en 2022 en España y Portugal.

A la vez, Von der Leyen cierra el debate sobre la reforma del mercado mayorista de electricidad. La presidenta da por muerto el abandono de las actuales normas de mercado marginalista. “Los expertos coinciden en que un sistema basado en el mercado y en la fijación de precios marginales ofrece claras ventajas en general. En las últimas semanas, muchos de ustedes –así como una amplia variedad de partes interesadas– han advertido contra la idea de modificar este diseño fundamental”, concluye Von der Leyen en una carta enviada a los presidentes de Gobierno.

Asimismo, la Comisión Europea plantea impulsar los contratos bilaterales de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) para que las industrias puedan desligarse de la volatilidad del mercado mayorista. La idea es eliminar barreras regulatorias y favorecer su uso para toda la generación baja en carbono, incluso combinándolos con contratos por diferencia (Cfd).

La Comisión anticipa también que reforzará y flexibilizará los mecanismos para facilitar un apoyo más rápido y amplio a las industrias más afectadas por el encarecimiento de



Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. REUTERS

Reunión de Aagesen y la presidenta de la CNMC en medio de la crisis

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reunirá hoy con la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en un encuentro que se produce en medio de la crisis de Irán. El Ministerio no ha indicado el motivo del encuentro, aunque en manos del organismo regulador hay ahora mismo varios puntos de interés para el ministerio. Por un lado, la CNMC elevó el tono en el pulso que mantiene con el Ministerio a cuenta del proyecto de real decreto que

regulará los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de electricidad. En un informe aprobado por su Pleno el pasado 6 de febrero, el regulador advierte de que el borrador desplaza hacia la Secretaría de Estado de Energía tareas de supervisión y definición de información que, a su juicio, corresponden a la CNMC tanto por su normativa propia como por el marco europeo. Ahora, además se inicia la revisión de las circulares de gas y la supervisión de las estaciones de servicio.

más del 90% de los costes de red son fijos y no dependen de la energía consumida, de modo que una estructura apoyada en cargos por capacidad refleja mejor la realidad económica del sistema. En paralelo, respalda la introducción o el refuerzo de peajes horarios estáticos, con señales de precio previsibles que incentiven desplazar la demanda fuera de las horas punta, reduzcan la congestión y retrasen inversiones de refuerzo.

En cuarto lugar, Bruselas prepara una reforma del mercado de emisiones de CO2 que supondrá reducir la entrega de derechos gratuitos pero que, a la vez, pondrá en marcha una reserva de derechos para mantener la estabilidad en los precios y lanzará un instrumento de 30.000 millones (el equivalente a 400 millones de derechos de CO2) para contribuir a la descarbonización de las industrias, tal y como ya indicó *elEconomista.es*.

El Consejo Europeo del pasado 19 de marzo acordó pedir a la Comisión Europea que presentase sin dilación un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de precios en los combustibles fósiles importados derivados de la crisis de Oriente Próximo.

Incluirá cambios en el mercado de emisiones y reforzará el apoyo a la industria

los precios de la electricidad a través del marco vigente de ayudas de Estado. Los gobiernos pueden compensar hasta el 80% de los costes indirectos del carbono, es decir, el sobre coste que soportan muchas industrias por el impacto del CO2.

En segundo lugar, Bruselas propondrá acelerar redes, permisos y flexibilidad del sistema para que más renovables baratas lleguen al mercado y rebajen el precio de la electricidad.

En tercer lugar, la Comisión plantea usar mejor las redes actuales con incentivos y tecnología, evitando inversiones innecesarias y permitiendo rebajas en los peajes para la industria intensiva en energía. En esta línea, Eurelectric ha propuesto reforzar el componente de potencia en la tarifa. Su argumento es que

La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro en una carta enviada a los presidentes de Gobierno de los distintos estados, que “al considerar posibles medidas adicionales para mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores y las empresas, debemos tener en cuenta las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de esas medidas eran de carácter general y no estaban bien orientadas, lo que provocó ineficiencias y unos costes fiscales muy elevados. En este contexto, es importante que cualquier medida a corto plazo no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal y específica, y minimice los costes fiscales”.